

■ ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El bienestar social no es la prioridad



El recorte federal de USD 143.000 millones en programas de desarrollo social para compensar un déficit que podría seguir creciendo tras un incremento del gasto militar de casi USD 200.000 millones amenaza a la red de seguridad social en planes como los cupones de alimentos, los préstamos estudiantiles y los servicios médicos de los estados. A mucha gente el trabajo no le alcanza para salir de la pobreza, y la discriminación sexual y racial siguen recortando los ingresos de las mujeres.

Institute for Agriculture and Trade Policy
Center of Concern/US Gender and Trade Network
Inter-American Forum & Global-Local Links Project
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

Patricia Jurewicz / Kristin Dawkins / Alexandra Spielfoch
Tanya Dawkins / Thea Lee

La pobreza amenaza la seguridad nacional

A Estados Unidos le falta mucho para cumplir con los compromisos de erradicación de la pobreza e inclusión social, especialmente entre las mujeres, que acordara hace 10 años en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague) y en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing). Una de cada ocho mujeres adultas vivía en la pobreza en 2004.¹ Como consecuencia de la presión creciente para cesar la ayuda pública a las madres de bajos ingresos, más mujeres pobres tienen trabajo pero sus vidas y las de sus familias no han mejorado. El costo de vida en Estados Unidos creció de manera constante sin aumentos salariales correspondientes. La cobertura médica mínima es inaccesible en términos económicos y las mujeres tienen menos tiempo para estar en casa. La pobreza y la exclusión social no solo son asuntos de la mujer, sino que afectan a todas las familias y comunidades. Más de seis millones de niños y niñas quedan solos en sus casas al volver de la escuela cada día. Casi 900.000 niños y niñas son víctimas de abuso o negligencia cada año y aproximadamente un niño o adolescente estadounidense muere por heridas de bala cada tres horas.² Hasta que el gobierno reconozca que 13 millones de niños y niñas viven en la pobreza y tome medidas correctivas, la seguridad y el bienestar del país padecerán una amenaza interna.

Trabajadores pero pobres

Para gran cantidad de familias, el trabajo no basta para escapar de la pobreza. Si bien el ingreso real per cápita creció 66% entre 1973 y 2000, el porcentaje de familias empobrecidas siguió siendo más

o menos el mismo (poco más de 11%).³ La pobreza persiste en parte porque el costo de cobertura de las necesidades básicas aumenta más rápido que los salarios. En 2004 los salarios de la mayoría de los trabajadores (ajustados a la inflación) permanecieron iguales o descendieron, y solo aumentaron los ingresos del 5% superior.⁴ Los trabajadores que ganan el salario mínimo fijado por el gobierno federal (USD 5,15 la hora) no reciben aumento desde 1997.

La cantidad de personas de familias pobres pero empleadas creció significativamente en la última década. La reforma de la seguridad social adoptada por el presidente Bill Clinton en 1996 obligó a los antiguos beneficiarios de la ayuda a trabajar en empleos del tipo *workfare* - puestos de trabajo sin cobertura médica y con sueldos tan bajos que mantienen a los empleados en la pobreza. Para 2003 las reformas de la seguridad social habían dejado a 35,9 millones de ciudadanos y habitantes de Estados Unidos por debajo de la línea nacional de pobreza.⁵

Durante tres años consecutivos aumentó el número de mujeres que vive por debajo del umbral de pobreza. Hoy hay 13,8 millones de mujeres adultas pobres (una de cada ocho). Para las mujeres no blancas y las madres solas la situación es mucho peor. Aproximadamente una de cada cuatro vive en la pobreza por discriminación racial, segregación ocupacional, reducción del acceso a la educación de calidad y un desempleo desproporcionadamente alto.⁶

El programa federal de Seguridad Social es la única fuente de ingresos para una de cuatro mujeres en la tercera edad, y dos de cada tres dependen de la Seguridad Social para recibir al menos la mitad de sus ingresos personales.⁷ Estudios indican que, sin la Seguridad Social, dos tercios de las

mujeres no casadas y mayores de 65 años que viven solas estarían viviendo en la pobreza.⁸

La brecha salarial

Hace 10 años Estados Unidos aceptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pero actualmente las mujeres ganan en promedio solo 76 centavos por cada dólar que ganan los hombres.⁹ Por su parte, en 1999 las mujeres afrodescendientes ganaban 62,5%, las indígenas ganaban 57,8% y las hispanas percibían 52,5% del salario promedio recibido por los hombres blancos.¹⁰ La discriminación racial, combinada con la segregación ocupacional, crea barreras formidables para acceder al trabajo, ascensos laborales y mejores remuneraciones. Las mujeres no blancas tienen menores oportunidades de capacitarse a través de la educación, el entrenamiento y las experiencias laborales. Siguen con una ínfima representación en gran cantidad de empleos bien remunerados en ciencia, tecnología, ingeniería y comercio. La discriminación basada en el sexo y la raza sigue recortando los ingresos de las mujeres.¹¹

El gobierno de George W. Bush frenó iniciativas para financiar la aplicación de leyes contra la discriminación salarial y cesó la recolección de información sobre las trabajadoras, al punto de retirar la información existente sobre la brecha salarial en el sitio web del Departamento de Trabajo.¹² La desigualdad y la discriminación seguirán ocurriendo si no se generan los datos desglosados por sexo necesarios para el análisis de género.

La sociedad bajo la pesada carga de Wal-Mart

Wal-Mart fue llevada a juicio con más frecuencia que cualquier otra compañía privada de Estados Unidos. En 1991 seis mujeres iniciaron una de las demandas más notorias, que se transformó en la mayor demanda colectiva por derechos civiles de la historia, con más de un millón de mujeres que

1 Women's Environment & Development Organization. *Beijing Betrayed*. Marzo de 2005, p. 162.

2 "Children's Defense Fund Action Council Scorecard Ranks Lawmakers on How Well They Protect Children". 23 de marzo de 2005, www.childrensdefense.org/pressreleases/050323.aspx

3 Mishel, Lawrence; Jared, Bernstein y Sylvia Allegretto. *The State of Working America*. Nueva York: Cornell University Press. 2005, p. 12.

4 Greenhouse, Steven. "Failing Fortunes of Wage Earners". *The New York Times*, 12 de abril de 2005.

5 Oficina del Censo de Estados Unidos. *Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2003*. Agosto de 2004, p. 9.

6 Institute for Women's Policy Research. *The Status of Women in the States*. 2004, p. 31.

7 Lee, Sunwha y Shaw, Lois. *Gender and Economic Security in Retirement*. Institute for Women's Policy Research, 2003, pp. 23-24

8 *Ibid*, p. iii.

9 Oficina del Censo de Estados Unidos, *op cit*, p. 34.

10 Institute for Women's Policy Research, *op cit*, p. 20.

11 *Ibid*, p. 22.

12 Women's Environment & Development Organization, *op cit*, pp. 156 y 161.

acusar a Wal-Mart de discriminarlas sistemáticamente en sus salarios y ascensos. Menos de 15% de los gerentes de tienda de la firma son mujeres, aunque ellas constituyen dos tercios del total de empleados.

Como el mayor empleador del país con aproximadamente 1,3 millones de trabajadores, Wal-Mart ha modificado el paisaje del comercio minorista, haciendo los máximos esfuerzos para impedir la sindicalización de los empleados, minimizar sus coberturas de salud y pagarles sueldos inferiores a la línea de pobreza. La empresa exige a sus empleados la firma de formularios en los que acceden a no sindicalizarse, en una flagrante violación de las leyes laborales de Estados Unidos.¹³ Si aun así los trabajadores intentan formar un sindicato, Wal-Mart los despiden o cierra la tienda en cuestión. En comparación con otras empresas de ventas al por menor, Wal-Mart posee un mayor porcentaje de empleados sin cobertura de salud. En todo el país, 66% de los trabajadores reciben asistencia sanitaria de parte de sus patrones, pero menos de 46% de los empleados de Wal-Mart están cubiertos por el seguro de salud de la empresa.¹⁴ El departamento de personal de Wal-Mart distribuye documentos que explican a los empleados la forma de solicitar los cupones de alimentos del gobierno y el seguro de salud provisto por el Estado.¹⁵ En 2004, los empleados de Wal-Mart estuvieron habilitados a recibir ayuda del gobierno federal por USD 2.700 millones.¹⁶ En definitiva, los contribuyentes de Estados Unidos están subsidiando la rentabilidad de la empresa.

Cómo fomentar la inseguridad

El presupuesto federal propuesto por el presidente Bush para 2006 recorta USD 143.000 millones en gastos discrecionales para los próximos cinco años al eliminar 150 programas nacionales. El presupuesto también recorta USD 30.000 millones a varios programas ordenados por la ley (conocidos como *entitlement programs*).¹⁷ Estos recortes draconianos no solo perjudican a las escuelas, el desarrollo comunitario, el transporte, la investigación científica y el medio ambiente, sino que también socavan programas de seguridad social de larga data como los cupones de alimentos, los préstamos estudiantiles y Medicaid.¹⁸

Más de 45 millones de personas carecen de cobertura médica. Está previsto que el programa Medicaid (creado hace 40 años y que brinda asisten-

cia médica a 35 millones de personas) sufra recortes de USD 45.000 millones en los próximos 10 años. Los estados suponen que se verán obligados a eliminar sus programas de Medicaid por la falta de fondos. Casi la mitad (45,3%) de todos los inmigrantes no ciudadanos carecen de cobertura médica, en comparación con el promedio nacional de 15,6%.¹⁹

Los recortes a los programas de desarrollo social fueron propuestos para compensar el déficit presupuestario superior a USD 400.000 millones acumulado en apenas cuatro años, a pesar del superávit mayor a USD 200.000 millones de 2000. Sin embargo, incluso con la eliminación de esos programas, se supone que el déficit crecerá USD 168.000 millones en los próximos cinco años por el incremento de casi USD 200.000 millones en gasto militar, de USD 106.000 millones por recortes impositivos a la población rica y de USD 36.000 millones por intereses sobre la deuda. Más de la mitad de los recortes impositivos se destinarán a familias con ingresos anuales superiores a USD 1 millón (0,2% de las familias) y casi 80% de los recortes impositivos se destinarán al 3,1% de familias con ingresos anuales superiores a USD 200.000.²⁰ Si los recortes propuestos se extienden, reducirán los ingresos del gobierno en USD 2,1 billones para 2015.²¹

La infancia relegada

La severa reducción del respaldo federal a los pobres agrava los problemas de los 50 estados. En 2005, 31 de ellos declararon haberse excedido en gastos. Con respecto al presupuesto federal propuesto para 2006, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales identificó al menos USD 30.000 millones de transferencias de costos del gobierno federal a los gobiernos estatales, incluyendo un recorte general de uno por ciento en el presupuesto del Departamento de Educación.²²

La ley "Que ningún niño quede atrás" del presidente Bush requiere que todos los alumnos de escuelas primarias y secundarias alcancen cierto puntaje anual en exámenes nacionales estandarizados. De no alcanzarse esos puntajes, la escuela sufrirá "reestructura", "desfinanciación" o "medidas correctivas". Las legislaturas estatales, los maestros y los defensores de la infancia apelaron para modificar esta ley que, en el caso de las escuelas primarias, asignó USD 12.000 millones menos de lo necesario para el presupuesto 2006. Desde la promulgación de la ley en 2002 la cifra acumulada representa USD 40.000 millones por debajo de lo necesario.²³ Asimismo, el gobierno de Bush está eliminando numerosos programas externos a la escuela que afectan la capacidad de aprendizaje de los alum-

nos. Por ejemplo, el presupuesto de 2006 elimina los fondos para 25.000 niños y niñas del programa Head Start,²⁴ y 300.000 niños dejarán de recibir servicios de guardería para 2009.²⁵

Aproximadamente 7% de las personas blancas entre 16 y 24 años de edad no habían terminado la enseñanza secundaria en 2002, en comparación con 12% de las negras y 26% de las hispanas.²⁶

Para hacer realidad un futuro digno

En los últimos años, Estados Unidos experimentó la mayor pérdida de empleos desde la Gran Depresión (1930-1939). Entre enero de 2001 y marzo de 2005, más de 2,7 millones de personas perdieron sus empleos en el sector manufacturero y otras 850.000 en los sectores de servicios profesionales y de la información.²⁷ Las empresas multinacionales, con economías de mayor escala y la capacidad para vender productos por debajo de su costo en mercados estratégicos, dejaron sin trabajo a empresas menores. Los sindicatos perdieron miembros y poder de negociación colectiva porque las empresas multinacionales reducen los salarios al trasladar los empleos fuera del país o amenazar con instalarse en otros países. En todo el país, los empleos nuevos pagan en promedio 21% menos que los puestos perdidos.²⁸ Y al tratar de competir con Wal-Mart, las tiendas rivales sostienen que ya no pueden pagar la cobertura médica.

Históricamente, los estadounidenses eran capaces de cubrir sus necesidades básicas con una combinación de beneficios que les permitían adquirir las necesidades fundamentales. En situaciones de extrema necesidad el gobierno brindaba ayuda para salir adelante. Lamentablemente, ni el gobierno ni las grandes empresas ofrecen ahora esa ayuda, salarios o programas que muchas familias y mujeres trabajadoras, especialmente de las comunidades no blancas, necesitan para vivir sin tener que pasar hambre.

El gobierno debe tomar varias medidas inmediatas para poder cumplir con los compromisos de desarrollo humano que asumiera hace 10 años. En primer lugar, debe restablecer la recolección de datos desglosados por sexo en todos los niveles. Sin el análisis de género es imposible elaborar un paquete de políticas que satisfagan las necesidades específicas de los pobres, proporcionen servicios al público en general y garanticen que el sector privado cumpla su parte. Por ejemplo, no se pueden crear políticas dedicadas a la remuneración de la licencia por maternidad, las guarderías infantiles y las necesidades ergonómicas específicas sin antes contar con la información que refleje el alcance de la discriminación en el lugar de trabajo.

(continúa en pág. 259)

13 Featherstone, Liza. "Will Labor Take the Wal-Mart Challenge?". *The Nation*, 28 de junio de 2004.

14 Miller, George. "Everyday Low Wages: The Hidden Price we all Pay for Wal-Mart." 16 de febrero de 2004, www.wakeupwalmart.com/facts/

15 Featherstone, Liza. "Down and Out in Discount America". *The Nation*, 3 de enero de 2005.

16 Miller, George, *op cit*.

17 Horney, James. Center on Budget and Policy Priorities. "Assessing the Conference Agreement on the Budget Resolution". 6 de mayo de 2005, www.cbpp.org/4-28-05bud.htm

18 Asistencia médica proporcionada por los estados a la población más pobre.

19 Oficina del Censo de Estados Unidos, *op cit*, p. 17.

20 *Ibid*.

21 Center on Budget and Policy Priorities. 9 de febrero de 2005, www.cbpp.org/2-9-tax.htm

22 <http://ncsl.org/programs/press/2005/pr050412.htm>; 14 de abril de 2005.

23 www.chn.org/dia/organizations/chn/humanneeds/050225a.html; 25 de febrero de 2005.

24 Programa para el desarrollo del niño a temprana edad.

25 *Ibid*.

26 Child Trends Databank. "High School Dropout Rates". 2003, www.childtrends.org/indicators/1HighSchoolDropout.cfm

27 Women's Environment & Development Organization, *op cit*, p. 161.

28 *Ibid*.

CANADÁ

(viene de pág. 175)

Los programas nacionales corren peligro. Luego de más de una década de amargas disputas entre las autoridades federales y provinciales el gobierno federal aumentó la ayuda financiera a las provincias para la atención médica y el cuidado de los niños, pero se muestra renuente a especificar las condiciones de los nuevos fondos.

El gobierno federal se está convirtiendo en el mandadero de las exigencias provinciales. Cada provincia tiene distintas opiniones sobre la forma de abordar las necesidades sociales. Pero prácticamente todas las provincias quieren presentar presupuestos equilibrados y recortes impositivos.

En la última década todas las provincias redujeron los impuestos y controlaron el crecimiento del gasto, al igual que el gobierno federal. En conjunto, los gobiernos provinciales y federal ofrecieron USD 205.000 millones de recortes impositivos entre 1996 y 2004. En contraste, se destinaron USD 88.500 millones a los nuevos gastos en salud, la principal prioridad social para los ciudadanos canadienses.

No obstante, existe cierta esperanza. La dinámica política actual desplazó la balanza hacia más gastos. Aunque se mantuvo dentro del límite autoimpuesto de 12% de la economía, el último presupuesto federal fue relativamente mayor en gastos que presupuestos anteriores, con un paquete de USD 4.100 millones para el cuidado de los niños. Al final, modificaciones realizadas al presupuesto reasignaron algunos elementos del plan original (postergando algunos recortes al impuesto a las empresas) para agregar USD 3.800 millones a lo largo de dos años a la vivienda, la infraestructura, la asistencia estudiantil, el medio ambiente y la asistencia internacional.

¿Qué repercusiones tendrá esto para los canadienses residentes en distintas partes del país? La vivienda, el cuidado de los niños y las colegiaturas están bajo el control de las provincias, que ven con otros ojos el equilibrio entre los mercados y las provisiones públicas en estos ámbitos. El único discurso que se comparte a nivel nacional sobre la mejora la cobertura de las necesidades básicas es el de la reducción de los tiempos de espera para recibir atención médica. Incluso ese objetivo se está desplegando a través de varias iniciativas públicas y acuerdos público-privados. ¿Los nuevos fondos mejorarán el acceso para todos?

Sin una visión coherente basada en los objetivos claves de derechos humanos, Canadá puede dispersarse en una colección inarticulada de estados con presupuestos equilibrados. La devolución de la responsabilidad en materia pública ha dificultado que el gobierno fije y cumpla las prioridades nacionales.

Si no unimos nuestros propósitos será difícil avanzar en las grandes ideas de nuestra época: la reducción de la pobreza y la desigualdad, en nuestro país y en todo el mundo. ■

EEUU

(viene de pág. 193)

El gobierno federal debe aplicar las leyes de igualdad de oportunidades y elevar el salario mínimo. Los legisladores federales y estatales deben fortalecer sus compromisos para con la vivienda de bajo costo y la cobertura médica pública, y a la vez minimizar la escalada de costos de la atención médica. También deben dedicar fondos suficientes que proporcionen servicios de guardería a las madres trabajadoras de bajos ingresos y garantizar a cada niño y niña el acceso a la educación de alta calidad. Las políticas de seguridad social deben reducir la pobreza con asistencia financiera que compense la inflación.

Finalmente, las grandes empresas deben pagar salarios por encima de la línea de pobreza, proporcionar cobertura médica de bajo costo que incluya la atención prenatal, ofrecer una jubilación digna a todos sus empleados (incluso a las madres que trabajan en horario parcial) y capacitar a las mujeres para que ocupen cargos gerenciales. Al atender adecuadamente las necesidades de sus empleados, las grandes empresas podrán habilitar al gobierno para ayudar a quienes realmente lo necesitan; entonces podremos afirmar con sinceridad que somos un país de mujeres, hombres y niños dignos y seguros. ■

FILIPINAS

(viene de pág. 195)

Los precios de los medicamentos y demás productos farmacéuticos son los más elevados de Asia, entre 250% y 1.600% más altos que en las vecinas Indonesia, Malasia, India, Bangladesh y Sri Lanka.¹⁶

Derecho al medio ambiente sano comprometido

La rehabilitación de nuestro medio ambiente avanzó poco desde 1990. Filipinas sigue padeciendo graves desafíos de contaminación urbana del aire y el agua, la degradación de recursos naturales y el descenso en la calidad de los recursos costeros y marinos. Filipinas es uno de los países más ricos del mundo en biodiversidad, pero su tasa de deforestación también es una de las más altas. Las leyes dirigidas a detener, aunque no a revertir, ese deterioro han fracasado.

El índice de sostenibilidad ambiental de 2002, desarrollado por las Universidades de Yale y Columbia, calificó a Filipinas en el lugar 117 entre los 142 países estudiados.¹⁷ En calidad ambiental (agua, aire, biodiversidad), Filipinas quedó en el antepenúltimo lugar.

Las políticas neoliberales llevaron a la liberación de las normas de inversión y al incumplimiento de las normas ambientales. El gobierno no reconoce la situación e insiste que los recursos naturales son subexplotados, a pesar de la creciente evidencia de su superexplotación y abuso. Abrió las puertas de par en par a las industrias de extracción, especialmente a las mineras, que el gobierno considera una solución para la crisis fiscal del país.

Las políticas y las leyes ambientales no faltan, pero los intentos por integrar los principios de desarrollo sostenible a las políticas y programas del país no lograron el cambio fundamental de dirección en lo que muchos creen es una vía insostenible de desarrollo.

Qué hacer

El gobierno debe darse cuenta de que los compromisos tienen que ver menos con las metas que con el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y los compromisos de justicia social y ambiental. La política de desarrollo debe reorientarse desde una perspectiva de derechos humanos.

Asimismo, el gobierno debe rendir cuentas por los desastrosos resultados de las políticas de liberalización, privatización y desregulación. Hace falta una revisión pública integral. La represión de la corrupción es urgente.

Hacen falta más movilizaciones populares y más fuertes para que el gobierno cambie de política y cumpla sus promesas. El Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza es una oportunidad para elevar el nivel de conciencia pública y acción colectiva.

Las estadísticas y su interpretación son una inquietud constante para los integrantes de Social Watch

16 Fera, Monica. "Fighting the high cost of health," *Philippine Graphic*, 27 de septiembre de 1999.

17 Índice de Sostenibilidad Ambiental 2002. www.ciesin.columbia.edu/indicators/esi/rank.html